



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** EJECUTIVO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-016-2021-00087-02 (E2-22-366)  
**Accionante:** LINA ALEXANDRA PÉREZ RÍOS  
**Accionada:** SOTRAURABA S.A.  
**Procedencia:** JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Asunto:** EXCEPCIÓN DE PAGO

En Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL SUBSECUENTE AL PROCESO ORDINARIO conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-016-2021-00087-02 (E2-22-366), instaurado por LINA ALEXANDRA PÉREZ RÍOS en contra de la sociedad TRANSPORTADORA DE URABA SOTRAURABA S.A., con el objeto de decidir el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la pasiva contra el auto mediante el cual se resolvieron las excepciones de mérito formuladas, proferido el 29 de septiembre de 2022 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín.

### 1. ANTECEDENTES

**1.1 Demanda.** LINA ALEXANDRA PÉREZ RÍOS, actuando a través de apoderada judicial, promovieron demanda ejecutiva en contra de SOTRAURABA S.A., a continuación del proceso ordinario solicitando se libre mandamiento de pago por las sumas a las que fue condenada la ejecutada. (fol. 2 a 5 archivo No 06 ExpedienteEjecutivo).

**1.2 Mandamiento de pago.** Mediante auto del 16 de junio de 2021 (Fols. 76 a 78 archivo No 06 ejecutivo), revocado por este tribunal el 19 de noviembre de 2021 (Fol. 29 a 42 archivo No 07), se ordenó:

*“PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor de LINA ALEXANDRA PÉREZ RÍOS y en contra de la SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABA SOTRAURABA S.A., por las siguientes sumas y conceptos:*

- a) *Por la suma de \$29.508.798, por concepto de indemnización por falta de consignación de las cesantías, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.*
- b) *Por la suma de \$32.951.940, por concepto de indemnización por la falta de pago de las prestaciones sociales, prevista en el artículo 65 del CST, liquidada a razón de \$24.591 diarios, sobre los 1.340 días que transcurrieron entre el 01 de marzo de 2017 y el 20 de noviembre de 2020.*
- c) *Por los aportes para el Sistema General de Pensiones causados entre el 24 de noviembre de 2011 y el 01 de marzo de 2017, en razón de un salario mínimo legal mensual vigente; efecto para el cual, previa información suministrada por la ejecutante, se oficiará a la administradora de fondos de pensiones a la que se encuentre afiliada, con el fin de que liquide el cálculo actuarial correspondiente.*

*SEGUNDO: NEGAR el mandamiento de pago deprecado sobre los demás conceptos deprecados, esto es, por los intereses moratorios de que trata el artículo 884 del C.Co., de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.*

**1.3 Contestación de SOTRAURABA S.A.:** La ejecutada contestó la demanda a través de apoderada judicial, proponiendo como excepciones la de pago, obligación de hacer- aportes a la seguridad social, y carencia de la obligación. (fol. 1 a 12 archivo No 23).

**1.4 Auto Apelado.** En audiencia del 29 de septiembre del 2022, el a quo declaró probada parcialmente la excepción de pago propuesta por la ejecutada respecto de los literales a) y b) del numeral primero, del auto que libró mandamiento de pago; frente al literal c) del referido auto, requirió a la parte demandante para que dé cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal en dicho numeral, para posteriormente resolver lo pertinente en relación con la concreción de la condena, particularmente en lo tocante con los aportes pensionales en el interregno de tiempo establecido en el proceso ordinario declarativo; finalmente, condenó en costas a la ejecutada. (Fol. 1 a 2 archivo No 42, con audiencia virtual archivo No 41).

En lo que interesa a la cuestión litigiosa, adujo que de conformidad con el artículo 442 del CGP, sólo pueden proponerse como excepciones las de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, por lo que, procedió a estudiar la excepción de pago propuesta por la ejecutada, indicando que una vez consultado el portal de títulos judiciales, existe un depósito por valor de \$29.508.798, y otro por la suma de \$110.000.000, los cuales están depositados a órdenes del juzgado, y con los cuales se entiende o se da cumplimiento al mandamiento de pago en particular al literal a) y b), esto es, por los \$29.508.798, por concepto de indemnización por falta de consignación de las cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y los \$32.951.940 por concepto de indemnización moratoria del

artículo 65 CST. Así las cosas, frente a esos dos conceptos se declaró probada la excepción de pago.

En relación con el numeral tercero del mandamiento de pago, manifestó que el tribunal libró mandamiento de pago por una suma que no se precisó y no está cuantificada, y en cualquier caso condicionó esta obligación a que sea la parte demandante la que informara cuál era el fondo de pensiones al que estaba afiliada, para así posteriormente ordenar realizar el cálculo actuarial. Como quiera que la parte demandante no informó cual era el fondo, ni ha solicitado la demandante el cálculo pensional a un fondo de pensiones, no es posible resolver sobre el cumplimiento de tal obligación.

Bajo ese horizonte, declaró probada la excepción de pago frente a los literales a) y b) del mandamiento de pago, requiriendo a la parte demandante para que dé cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal en lo relativo con el cálculo actuarial para concretar la condena de aportes al sistema general en pensiones. En últimas, gravó en costas a la ejecutada.

**1.5 Impugnación y límites del ad quem.** Inconforme con la anterior decisión, la parte ejecutada interpuso el recurso de alzada, quien argumentó que el juzgado desconoce la consignación aceptada por la parte ejecutante, por valor de \$9.405.747, más costas y agencias en derechos de \$2.500.000, en la cual se encuentran incluidas la prima de servicios, vacaciones, auxilio a las cesantías e intereses a las cesantías; vale decir, debe revisarse dicho valor de cara al cumplimiento de la obligación; que frente a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, no le era dable al Tribunal adicionar esta pretensión, dado que no estaba en la sentencia de primera instancia; que respecto a los aportes al sistema de seguridad social es a la demandante a quien le toca demostrar la afiliación a un fondo, y ella no ha demostrado haber realizado tal afiliación, por lo tanto, le queda imposible a la ejecutada cumplir con esa obligación; que no hay lugar a costas en el ejecutivo, ya que prosperó la excepción de pago y es una fiel muestra del cumplimiento por parte de la ejecutada, además de haber obrado de buena fe; que debe tenerse en cuenta que dio cumplimiento a la obligación a pesar de ser un sector afectado por la pandemia, circunstancia que debió sopesarse al momento de condenar en costas.

**1.6 Trámite de Segunda Instancia.** El recurso de apelación se admitió el 03 de octubre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 10 del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito que estimaren pertinentes, siendo presentadas alegaciones por la parte demandante, quien manifestó que la parte ejecutada pretende que se descuente lo que no se está cobrando en el mandamiento ejecutivo,

es decir, descontextualiza lo pedido en el proceso sin argumentos valederos, por lo tanto, peticiona que se confirme la decisión de instancia.

## 2. ANÁLISIS DE LA SALA

**2.1 Apelación de auto y principio de consonancia.** El recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada se estudiará de acuerdo con las directrices establecidas en el artículo 66A del CPTSS que consagra el principio de consonancia, esto es, teniendo en cuenta los puntos y materias objeto de inconformidad, expuestos por la recurrente.


**2.2 Problema jurídico.** Corresponde a la Sala dilucidar el siguiente problema jurídico: **i) ¿Se equivocó el a quo al declarar probada la excepción de pago sin tener en cuenta el pago efectuado por valor de \$9.405.747?** y **ii) Si ¿Hay lugar a la condena en costas a cargo del ente societario ejecutado?**


**2.3 Excepción de pago.** Para decidir respecto de la legalidad de la providencia impugnada, mediante la cual se declaró probada la excepción de pago que propuso la accionada, cumple recordar que de conformidad con el artículo 1625 del C.C., el pago es un modo natural de extinguir la obligación y se presenta cuando el obligado realiza la solución efectiva de lo que se adeuda, por lo que el pago debe ser conforme al tenor de la obligación, tal y como lo disponen los artículos 1626 y 1627 del mismo estatuto sustantivo.

Conforme a ello, ha de señalarse en principio que el título base del recaudo lo constituye una sentencia debidamente notificada y ejecutoriada, luego debe precisarse que el numeral 2° del artículo 442 del C.G.P., norma que regula lo atinente a la formulación de excepciones dentro del proceso ejecutivo, faculta a la accionada cuando el título ejecutivo consista en una providencia judicial, para proponer, entre otras, la excepción de pago, razón suficiente para que esta Sala asuma su estudio, dado que la misma fue invocada por la ejecutada para excepcionar la extinción de la obligación materia de condena.

Descendiendo al sub examine, debe tenerse en cuenta que la parte recurrente insiste en que el a quo al momento de estudiar la excepción de pago no tuvo en cuenta el pago realizado por valor de \$9.405.747; sin embargo, de entrada debe decirse que es totalmente equivocada la postura de la alzadista, ya que pretende que se tenga en cuenta una suma de dinero que fue pagada a favor de la parte demandante, pero que no hace parte del mandamiento ejecutivo. Lo anterior, habida cuenta que en el mandamiento de pago del 19 de noviembre de 2021 (Fol. 29 a 42 archivo No 07), se ordenó librar el mismo por los conceptos de indemnización por falta de pago de consignación de las cesantías, indemnización por falta de pago del artículo 65 del CST y lo relativo a los aportes a seguridad social, mientras que los \$9.405.747 corresponden

al pago de conceptos diferentes, tal como el mismo representante legal de la encartada los discrimina en oficio del 24 de noviembre de 2020, así:





Doctors

**GLADYS MAYA VILLA.**

ASUNTO: Informe de pago.

**SANTIAGO MUÑOZ VELÁSQUEZ**, mayor de edad, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABÁ S.A. (SOTRAURABA S.A.) identificada con número de NIT 890902760 - 1, por medio de este escrito relaciono el pago realizado en cumplimiento parcial de la sentencia que referencia a continuación:

**INFORME DE PAGO:**

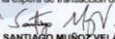
La empresa SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABÁ S.A. (SOTRAURABA S.A.), informa que ya se realizó el pago correspondiente a la situación derivada del proceso que se detalla de la siguiente manera:

<b>DATOS DEL PROCESO</b>	
<b>ORIGEN</b>	JUZGADO 16 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
<b>DEMANDANTE</b>	LINA ALEXANDRA PEREZ RIOS
<b>DEMANDADOS</b>	SOTRAURABA S.A.
<b>RADICADO</b>	JOAQUIN EMILIO GÓEZ LOPEZ 05001310501620170091500

Se realizó la consignación por valor de \$ 9.405.747,00 al número de cuenta 10342396302 Ahorros Bancolombia, correspondiente a la señora GLADYS ONELIA MAYA VILLA, por los siguientes conceptos:

- Costas y agencias en Derecho, por valor de \$ 2.500.000,00.
- Prima de servicios, vacaciones, auxilio a la cesantía e intereses a la cesantía, por valor de \$ 6.905.747,00.

Quedando a la espera de transacción de los otros conceptos.

Atentamente, 

**SANTIAGO MUÑOZ VELÁSQUEZ**  
Representante Legal  
NIT de la Empresa 890902760 - 1.

BOGOTÁ PRINCIPAL, Terminal de Transportes Sur Occ. 44C No. 75 505 Sur Occ. 44B 40006 0503-444 9273 E-mail: sntes@sostrauraba.com.co 4050304 - 0303884

En ese sentido, dado que el mandamiento de pago se edificó sobre conceptos diferentes a los que aduce la ejecutante, no se evidencia que el a quo haya cometido algún dislate al dar por probada tal excepción con los títulos judiciales que aparecen en el plenario (Fol. 1 y 2 archivo No 37), el cual, se itera, comprende solo los conceptos referidos en los literales a) y b) del numeral primero del auto que libró mandamiento de pago. Asimismo, llama la atención de la Sala la censura de la ejecutante, ya que desconoce que las excepciones en el proceso ejecutivo van ceñidas al mandamiento de pago, es decir, si bien la entidad cumplió con algunas de las condenas esgrimidas en el proceso ordinario laboral, ello de cara al adelantamiento del proceso ejecutivo no tienen relevancia, ya que tales conceptos (vacaciones, prima de servicios, cesantías e intereses, incluida las costas del proceso ordinario), no fueron tema u objeto del mandamiento de pago, y por ende, tampoco puede discutirse al momento de entrar a resolver la excepción de pago propuesta.

Otro de los puntos de apelación tiene que ver con que no debía quedar incluida la indemnización moratoria del artículo 65 del CST en el mandamiento de pago, aspecto que conllevaría a la Sala a estudiar el mandamiento de pago, lo cual es improcedente en la etapa de resolución de excepciones, a juzgar porque el sustento expuesto no guarda correspondencia con la excepción de pago propuesta por la ejecutada, por lo que, de conformidad con el artículo 442 del CGP, no es procedente en esta instancia resolver inconformidades como la planteada por el ente ejecutado. En gracia de discusión, desconoce este último el auto del 19 de noviembre de 2021 (Fol. 29 a 42 archivo No 07), en la que el Tribunal acogió el recurso de apelación propuesto por la parte actora e incluyó entre otros conceptos la indemnización moratoria del artículo 65 del CST en el mandamiento de pago, además de que tal condena sí hizo parte del proceso ordinario laboral, tal como aparece en la sentencia de

primera instancia (Fol. 374 a 375 archivo No 01), modificada por este Tribunal el 13 de marzo de 2020 (Fols. 385 archivo No 01), razones más que suficientes para desechar la alzada de la pasiva.

Frente a los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, ciertamente el mandamiento de pago hace alusión a que la demandante previamente suministrará la información de la AFP donde se encuentre afiliada, gestión que al no cumplirse por la demandante, impide que se oficie a la entidad de seguridad social para concretar el importe de dicho concepto a cargo de la ejecutada, razón por la cual, no se evidencia que la decisión del a quo contraría el ordenamiento jurídico, pues por el contrario, se ciñe en un todo al mandamiento de pago, y de consiguiente, queda en suspenso el cumplimiento de tal obligación hasta tanto la demandante proceda a atender con estrictez el requerimiento realizado por el juzgado de origen.

Colofón de lo dicho, habrá de impartirse confirmación al proveído opugnado.

**2.4 Costas.** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y advirtiéndose que el recurso de apelación interpuesto por SOTRAURABA S.A. no salió avante, a su cargo se impondrán costas procesales. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho y en favor de la ejecutante, la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a \$580.000. Las de primera se confirman, dado que el pago de lo ordenado en el mandamiento de pago solo se hizo efectivo una vez la parte demandante interpuso la acción ejecutiva, pues la demanda ejecutiva se interpuso el 6 de noviembre del 2020 (Fol. 1 archivo No 06), y los títulos ejecutivos que dieron lugar a la prosperidad de la excepción de pago datan del mes de abril, mayo, y junio de 2021 y de abril de 2022 (Fol. 1 y 2 archivo No 37), lo que connota que sólo fue posible para la demandante obtener el pago las condenas mediante la sentencia judicial con la iniciación y trámite del proceso ejecutivo subsiguiente, razón por la cual, resulta procedente las costas impuestas, sin que sea justificativo del incumplimiento la emergencia sanitaria suscitada por la pandemia, toda vez que ello no constituye razón suficiente para desconocer la decisión judicial proferida en favor de la actora en el proceso ordinario laboral.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

### **3. RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto adiado el 29 de septiembre de 2022 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, según y conforme lo expuesto en la parte motiva del proveído recurrido en apelación.

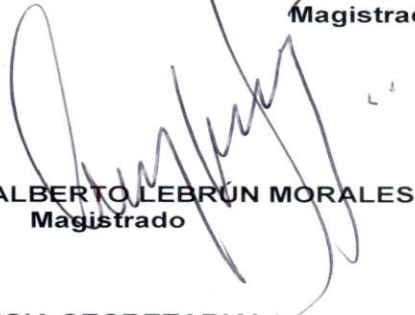
**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo de SOTRAURABA S.A., fijándose como agencias en derecho, en favor de la ejecutante LINA ALEXANDRA PÉREZ RÍOS, la suma de medio SMMLV equivalente a \$580.000. Las de primera se confirman.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, con arreglo a lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
Magistrado Ponente

  
**CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES**  
Magistrado

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**  
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA  
LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS n.º 130**, fijados en la secretaría del Tribunal, hoy treinta y uno de julio de **2023** a las 08:00am, los cuales pueden ser consultados en ["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

**RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS**  
Secretario